



Montevideo, octubre 28 de 2013

Resolución N° 142
INDDHH 133/12

Señor

De nuestra consideración:

En diciembre del pasado año, compareció Usted ante esta Institución Nacional de Derechos Humanos efectuando planteamiento acerca del descuento del 20% que el Banco de Previsión Social estaba efectuando sobre su Pensión Especial Reparatoria (PER). Este descuento correspondía a devolución de haberes pensionarios percibidos en períodos en los que el BPS habría constatado que su sueldo excedió el monto permitido por la ley N° 18.033. Cuestionaba la oportunidad de ese descuento, y la demora del BPS en efectuar controles y comunicar en forma, habilitando que se acumularan sumas a cobrar que reducían considerablemente su pensión.

De conformidad con lo establecido en el Cap. III de la ley N° 18.446, la INDDHH inició procedimiento de investigación y ofició al Banco de Previsión Social (oficio N° 027/2013), solicitando que, en el plazo máximo de 20 días remitiera un informe pormenorizado sobre los rubros percibidos y descontados, en particular las fechas en que comenzó el pago indebido, el momento en que el BPS lo detectó y fecha en que empezaron a realizarse los descuentos.

El BPS envió la información solicitada el 12 de marzo de 2013, indicando además que cuando el Organismo detectó que había superado el tope le confirió una vista, comunicando que se le suspendería el beneficio de la PER, lo cual no llegó a efectivizarse, dado que en plazo breve bajaron sus ingresos y recuperó el derecho a percibirla. Se comenzó entonces a efectuar un descuento del 20% de la prestación.

El tema referente a las leyes de reparación, en especial de la 18.033 – de la que Usted es beneficiario – y de la 18.596, ha sido objeto de estudio por parte de la INDDHH, que el 14 de diciembre de 2012, emitió una Recomendación, en uso de sus facultades (art. 4°



*Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo
Juncal 1355 - Piso 10 CP 11.000
Teléfono: (5982) 1948
E-mail: secretaria@inddhh.gub.uy
Montevideo – Uruguay*



lit.I de la precitada ley N° 18.446), señalando las modificaciones a la legislación vigente que entiende ajustado instrumentar. En dicha Recomendación concluyó:

"La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo considera que:

La legislación vigente establece algunas limitaciones que no condicen con las obligaciones internacionales en materia de reparaciones, entre otras, al establecer que el/la beneficiario/a tiene que optar entre la jubilación especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial. En este aspecto la prestación social generada que abarca al conjunto de personas inactivas (seguridad social) tiene una naturaleza y fundamento distinto a la obligación estatal de reparar, emanada de las obligaciones internacionales en materia de reparación de graves violaciones a los derechos humanos y del combate a la impunidad.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recomienda al Poder Ejecutivo, por lo expuesto y en base a los fundamentos reseñados, que en un plazo razonable que tenga especial consideración el promedio de edad de las personas beneficiarias, el tiempo transcurrido, así como que por la materia en cuestión al Ejecutivo le está vedado de remitir la iniciativa en el año previo a la elección nacional.

1) la Pensión Especial Reparatoria se perciba por toda persona detenida y /o procesada (art.11 Ley 18.033) independientemente de la fecha de liberación y del monto de ingresos percibidos de cualquier otra naturaleza y que la misma sea compatible con cualquier previsional (entiéndase jubilaciones, pensiones, subsidios, etc.).

2) la jubilación especial prevista en el artículo 8 (actividad privada) sea compatible con las jubilaciones propias provenientes de otras actividades o cajas previsionales, así como con las pensiones.

3) no exista incompatibilidad alguna entre el cobro de cualquier jubilación o pensión con el cobro de la Pensión Especial Reparatoria.

4) a las personas despedidas de la actividad privada en base al decreto 518/973 de 4 de julio de 1973 no les será requerida la exigencia de edad mínima ni de años de servicio.

5) serán pasibles de recibir los montos correspondientes a las personas beneficiarias, sus causahabientes en caso de fallecimientos de aquellas".

Esta Recomendación fue remitida formalmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y se ha hecho un seguimiento constante de su cumplimiento, sin que se haya recibido respuesta positiva hasta el momento.

Por consecuencia, debemos comunicarle que un cambio en su situación pensionaria depende de que exista voluntad política para modificar la legislación vigente, conforme a las pautas que explicitamos en nuestra Recomendación.

Se ha resuelto, entonces, archivar estas actuaciones, y comunicárselo. Saludamos atentamente.

MIRTHA GUIANZE
DIRECTORA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo



MARIANA GONZÁLEZ GUTIER
DIRECTORA
Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo
C.P. 11.000
Teléfono: (5982) 1948
E-mail: secretaria@inddhh.gub.uy
Montevideo - Uruguay

JUAN FAROPPA
DIRECTOR
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo